universidad

Con la excusa de la crisis todo vale

Mª José Saura Responsable Secretaría de Universidad FE CCOO

Parece que las comunidades autónomas van alineándose en el incumplimiento de la financiación de las universidades, con el objetivo único de llevarlas a una situación económica insostenible, hasta el punto de poner en peligro las nóminas de sus trabajadores y no poder hacer frente a los pagos de sus proveedores.

CURIOSAMENTE, pese a la autonomía universitaria –un derecho constitucional–, los presupuestos de las universidades son aprobados por sus Consejos Sociales. El Consejo Social es un órgano de participación de la sociedad en la universidad. Le corresponde la aprobación del presupuesto y las comunidades autónomas regulan la composición y sus funciones, cuyo presidente es nombrado por la comunidad. Por tanto, las cantidades de los presupuestos han sido autorizadas y aceptadas por la comunidad autónoma, por lo que nos encontramos en un caso de deslealtad grave entre administraciones. Esta falta de compromiso está conduciendo a una situación sin precedentes en el sistema universitario. Paralelamente, hemos asistido a una campaña mediática de la mala gestión de éstas para justificar la actuación irresponsable. Ahora resulta que tenemos exceso de universidades, de titulaciones, y duplicidad de estas, todas ellas autorizadas por la comunidad autónoma y el Gobierno central, en muchos casos para satisfacer criterios partidistas y electoralistas. No vale el argumento según el cual las comunidades gobernadas por determinado partido son más irresponsables que las gobernadas por otro distinto, pues todos los partidos que han gobernado hasta la fecha han actuado igual, generando la actual situación.

Hace años se debería haber abordado el mapa universitario de una manera racional y planificada. Pero el desinterés de las administraciones por las universidades es algo que venimos arrastrando irremediablemente desde hace tiempo. El decreto de Rajoy es una vuelta de tuerca más, y demuestra que las universidades no son una prioridad para este Gobierno, como tampoco la ciencia tras el duro ajuste en materia de I+D+i.

Por otra parte, el presupuesto global de las universidades es un pastel tan grande, al que el poder económico y financiero desea hincarle el diente. Día tras día aumentan los procesos de externalización de servicios, que los convierte cada día en más ineficientes, contribuyendo a la precariedad del empleo.

Los poderes económicos y financieros no hacen más que repetir que es necesario un cambio en el modelo de gobernanza para hacerse con el control de las universidades y el pastel. Hemos de insistir cada día y con voz muy alta, que las universidades son un bien social, al servicio de la ciudadanía, y que la autonomía universitaria es una garantía, además de un derecho constitucional. Parece que algunos olvidan este derecho al invadir competencias con una actitud que se podría calificar de imperialista. Con la excusa de la crisis, todo vale, pisoteando los derechos de los ciudadanos. Necesitamos lealtad entre administraciones y responsabilidad de éstas, sin intereses partidistas, sin recortes y con un compromiso con la educación superior y la ciencia.

Me permitiréis un símil doméstico: es como si una familia decide tener tres hijos y después alega que como no puede mantenerlos, primero los deja sin comer y después se plantea si los abandona a su suerte o los vende a cachitos para darles de comer un poquito.